

Reparos - R de Apelación - Proceró No 2019-00100

Cobros Judiciales <cjudicialesbarrerochaves@gmail.com>

Mié 30/11/2022 2:19 PM

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Casanare - Yopal <j02cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL

E. S. D.

Ref. Precisión de Reparos – Recurso de Apelación

Proceso Verbal No. **2019 - 00100.**

De URBANIZACIÓN CAMINOS DE SIRIVANA.

Contra CONSTRUCTORA LLANORIENTE S.A.S. y otra.

LUZ ANGELA BARRERO CHAVES, de condiciones civiles y profesionales ya conocidas, actuando como apoderada judicial del conjunto demandante, por medio del presente escrito, respetuosamente, me permito precisar, con base en lo establecido en el inciso segundo del **No 3° del art. 322** del Código General Del Proceso, **Los Reparos** – Expuestos mediante Recurso de Apelación interpuesto y concedido, encontrar de la decisión proferida por su Señoría en audiencia llevada a cabo el día 25 de noviembre del 2022, en memorial que anexo en formato PDF.

LUZ ÁNGELA BARRERO CHAVES

ABOGADA - ESPECIALIZADA

CEL: **310-785 2953**

Señor
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL
E. S. D.

Ref. Precisión de Reparos – Recurso de Apelación
Proceso Verbal No. **2019 - 100.**
De URBANIZACION CAMINOS DE SIRIVANA.
Contra CONSTRUCTORA LLANORIENTE S.A.S. y otra.

LUZ ANGELA BARRERO CHAVES, de condiciones civiles y profesionales ya conocidas, actuando como apoderada judicial del conjunto demandante, por medio del presente escrito, respetuosamente, me permito precisar, con base en lo establecido en el inciso segundo del **No 3° del art. 322** del Código General Del Proceso, **Los Reparos** – Expuestos mediante Recurso de Apelación interpuesto y concedido, encontrar de la decisión proferida por su Señoría en audiencia llevada a cabo el día 25 de noviembre del 2022, en los siguientes términos:

REPAROS

1. ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

Si bien esta litigante pudo incurrir en una imprecisión al considerar que el tipo de acción a invocar en este caso, era de resorte de la responsabilidad civil extracontractual, en el entendido de que según la doctrina y la jurisprudencia el reglamento de copropiedad se considera un contrato, pero que el mismo solo es bilateral cuando existe consenso entre los copropietarios, y que se entiende que es un contrato de oferta comercial cuando existe un único titular del dominio, como era el caso del conjunto Caminos de Siriana, en la época en la que se firmo el contrato de vigilancia que fue suscrito por el administrador provisional (Constructora) violando las restricciones establecida en el No 2 del art. 106 art. del reglamento de corporeidad, del cual hoy se reclaman los perjuicios ocasionados a la copropiedad; lo cierto es que como bien lo han señalado en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema De Justicia y La Corte Constitucional, **“La calificación del instituto jurídico que rige el caso es una atribución de la función judicial en razón del postulado del iura novit curia.** Por lo tanto, corresponde hacerla al juez mediante la elaboración de los enunciados calificativos que le permiten delimitar el tema de la prueba y solucionar el conflicto jurídico mediante la declaración de la consecuencia prevista en la proposición normativa que contiene los supuestos de hecho que soportan las pretensiones y resultan probados en el proceso.

“Las pretensiones o excepciones que se soportan en los hechos probados deben ser resueltas con base en la norma sustancial que permite declarar la consecuencia jurídica prevista en esa proposición normativa. Sólo así se garantiza que casos similares tengan soluciones similares”. SC780-2020 Radicación nº18001-31-03-001-2010-00053-01 - (Aprobado en sesión del diecisiete de julio de dos mil diecinueve), Magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Al respecto, esa misma Corporación, en **sentencia N° 208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906**, indicó:

*“...el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, **y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante.** Tales hechos, ha dicho la Corte, son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobación de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre que habrá de rodar la controversia”*

(Sentencia de 2 de diciembre de 1941). Si están probados los hechos, anotó en otra ocasión, `incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante, los errores de las súplicas: da mihi factum, dabo tibi ius´ (G.J. No. 2261 a 2264, pág. 137). (negrilla y subrayado fuera de texto).

De lo que se colige, que no es el la parte actora a la que le corresponde encuadrar el derecho y aplicar los institutos jurídicos correspondientes al caso, es en virtud del numeral **5º del artículo 42** del Código General del Proceso, que se le impone al juez el deber- obligación de **«interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto»**; por ello, como es en este caso, si el Juez determinó que una vez revisado los fundamentos facticos invocados (causa petendi) y el desarrollo probatorio que se realizó dentro del proceso que nos ocupa, claramente pudo evidenciar que la fuente de la obligación estaba contenida en los art. 50 y 51 de la ley 675 del 2001 y el reglamento de copropiedad, y que por tratarse de una actividad reglada y consensuada y en consideración a que la conducta fuente de los perjuicios que en este caso se reclaman, parte de la base del incumplimiento de las obligaciones del representante legal consagradas en el acuerdo que los rige , esto es el reglamento de copropiedad y por tener fuente en el incumplimiento de los deberes a cargo del administrador; el tipo de acción que se le debió aplicar a esta demanda era sin dudar la del Régimen de Responsabilidad Civil Contractual y no Extra Contractual como así lo intitula la actora, lo que debió hacer con base en este principio fue encausar la demandada para dar su verdadero sentido y alcance, pues el mismo tenía la obligación de interpretar los hechos narrados en el libelo para hacer la calificación jurídica de la controversia, según fuera de naturaleza contractual o extracontractual; y NO fallar con base a la denominación de la acción que hizo la parte, impartiendo un fallo inhibitorio donde se denegaron todas las pretensiones por considerar que la acción era improcedente.

En tal sentido, la Corte indicó que, **«en razón del postulado “da mihi factum et dabo tibi ius” los jueces no quedan sujetos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por el actor, porque lo que delimita la acción y constituye la causa petendi no es la fundamentación jurídica señalada en la demanda –la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso–, sino la cuestión de hecho que se somete a la consideración del órgano judicial»**.

En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción.” **(CSJ SC13630-2015, 7 Oct. 2015, Rad. 2009-00042-01).** (negrilla y subrayado fuera de texto)

Así mismo esta corporación en **SC780-2020 Radicación nº18001-31-03-001-2010-00053-01 - (Aprobado en sesión del diecisiete de julio de dos mil diecinueve)**, Magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Advierte que “De tal manera que cuando una pretensión se soporta en una **causa petendi** (hechos) que puede encuadrarse en una responsabilidad contractual, el carácter único de la indemnización no puede negarse bajo la excusa de que el actor se equivocó al señalar que escogía la acción de responsabilidad extracontractual, calificación jurídica del instituto que lo regula. Semejante grado de injusticia e inequidad no ha sido jamás defendido por jurista alguno, ni mucho menos podría llegar a ser admitido por la jurisprudencia.

Al respecto, justamente, en **CSJ SC-071, 16 Jul. 2008, Rad. 1997-00457)**, la Sala indicó:

[N]o se trata de restringir o menoscabar las potestades hermenéuticas del juzgador, ni mucho menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, quede irremediabilmente ligado a esa expresión. Por el contrario, ya se ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de desentrañar el verdadero y más equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realización puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sitúe su petición en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero al exponer el objeto de su reclamación o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario, es decir que su

pedimento se afinca en la responsabilidad derivada del incumplimiento negocial, pues en esa hipótesis deberá el juzgador emprender el ejercicio intelectual pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominación que al desgaire le hubiere imprimido el accionante. Otro tanto ocurrirá en la hipótesis antagónica.

En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor ha explicitado de manera unívoca y contundente la especie de responsabilidad que quiere hacer valer contra el demandado, no le es dado al fallador desdeñar esa elección ni alterar a su gusto, sin importar los móviles que lo alienten, la clara y expresa decisión del demandante.

Así pues, la postulación del tipo de acción que rige el caso y la identificación de la correspondiente norma sustancial que ha de tomarse en cuenta para solucionar la controversia jurídica (que presupone necesariamente la interpretación de la demanda), son actos obligatorios que han de realizar los jueces, pues son de su exclusiva competencia, tal como lo ha explicado la doctrina académica y la jurisprudencia de esta Corte.

Consideraciones que se encuentra desconocen no sólo el deber que tiene el juez de interpretar la demanda para desentrañar su genuino sentido cuando éste no aparezca de forma clara y de resolver de fondo la controversia puesta a su consideración; sino que además faltan al principio fundamental de que el funcionario judicial es el que define el derecho que debe aplicarse en cada proceso «iura novit curia» y no las partes, así como que el derecho a la impugnación.

Lo anterior, porque el Juzgador al definir el alcance de una demanda a fin de poder determinar el curso del litigio y la solución del mismo, ésta limitado únicamente a no variar la causa petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio la denominación a la acción o tipo de responsabilidad, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario.

De ahí, que los descuidos, **imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al invocar un tipo de responsabilidad –extracontractual o contractual- deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias, sino a los hechos fundamento de las peticiones - STC6507-2017 - Radicación n.º 11001-22-03-000-2017 00682-01 (Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete.)**, Magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

“Así las cosas tenemos que, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, afirmó que a la parte actora le corresponde expresar con claridad los hechos y pretensiones en que sustenta sus alegaciones, **mientras que al juez le corresponde interpretar la demanda y «elegir el régimen de responsabilidad aplicable a cada caso concreto»**, aun cuando el demandante se hubiera equivocado en su formulación.

Pues estando demostrados en el proceso los elementos de uno u otro tipo de responsabilidad, sin que sea admisible afirmar que la calificación jurídica que llegue a hacerse del caso lesiona el debido proceso de la contraparte, pues ésta tuvo siempre la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

El acierto de la decisión judicial está determinado por la correcta aplicación de la norma sustancial que rige el caso, por la adecuación de los enunciados fácticos a los hechos probados en el proceso y por la coherencia lógica entre las proposiciones de hecho, las de derecho y las consecuencias jurídicas que de ellas se deducen.

La calificación de la acción sustancial o instituto jurídico que rige el caso y delimita el marco normativo, no la establecen las partes en su demanda y contestación, ni es materia de la fijación del objeto del litigio, dado que es una interpretación que hace el juzgador acerca del tipo de acción propuesta, como manifestación del iura novit curia.

La causa petendi corresponde únicamente a los hechos en que se soportan las pretensiones, pero no a los fundamentos de derecho que se señalan en la demanda, los cuales pueden ser muy breves o, inclusive, estar equivocados, sin que ello constituya una irregularidad procesal o conlleve a la pérdida del derecho sustancial.

Así ha sido explicado por nuestra jurisprudencia, al aclarar que la congruencia de las sentencias «sólo se refiere a la imposibilidad del juzgador de variar la causa petendi, pero

no así el derecho aplicable al juicio, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario. En razón de este postulado, los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al citar o invocar el derecho aplicable al caso deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias.

Sin embargo, en el caso bajo estudio el Juzgador indicó que la acción incoada era la de responsabilidad civil extracontractual, porque así se había pedido; pese a que, como el mismo Juez indicó, la fuente del reclamo estaba contenida en los art. 50 y 51 de la ley 675 del 2001 y el reglamento de copropiedad, y que por tratarse de una actividad reglada y consensuada y en consideración a que la conducta fuente de los perjuicios que en este caso se reclaman, parte de la base del incumplimiento de las obligaciones del representante legal consagradas en el acuerdo que los rige, esto es el reglamento de copropiedad y por tener fuente en el incumplimiento de los deberes a cargo del administrador; el tipo de acción que se le debió aplicar a esta demanda era sin dudar la del Régimen de Responsabilidad Civil Contractual y no Extra Contractual como así lo intitulo la actora.

Ahora bien, como la Corte lo ha señalado, "gracias a que existen institutos jurídicos diferenciados, como el contrato o la responsabilidad extracontractual, las personas tienen alternativas entre las cuales pueden elegir para ceñir a ellas sus conductas. El significado de esos institutos está dado por el ordenamiento jurídico, por lo que su valor no depende de lo que el agente piense o haga.

Este elemento integrador para cualificar la conducta orientada por institutos jurídicos es el criterio jurídico del juez: el aspecto evaluativo o calificativo de la conducta orientada por normas corresponde al juez, pues sólo él está facultado para dictar el significado de los institutos jurídicos.

El conocimiento o creencia de las partes no puede interferir en los criterios apreciativos que permiten calificar el instituto jurídico. Las normas se aceptan y se cumplen a pesar de que pudieran ser interpretadas de otra manera.

Las personas pueden creer que tienen la razón y que el significado de los institutos y conceptos jurídicos es el que ellas les dan; si no fuera así no insistirían en defender judicialmente intereses o derechos de los que no siempre son titulares. Por ello, lo que ellas piensen que es jurídicamente correcto es irrelevante para el sistema de derecho privado. El aspecto cognitivo que los usuarios poseen acerca de los institutos jurídicos no tiene que coincidir con el aspecto evaluativo que está en cabeza del juez. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si a ello se agrega el hecho de que el significado de las normas puede ser vago, impreciso, ambiguo o de textura abierta, ello se erige en una razón más para no encomendar a las partes la identificación del régimen jurídico que decidirá la controversia. La imprecisión y ambigüedad del significado de las normas es una característica propia del sistema jurídico y sus consecuencias adversas no pueden atribuírsele al usuario de la justicia, sino que es un problema que tiene que resolver el juez.

Al juez le está prohibido denegar administrar justicia por silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley (artículo 48 de la Ley 153 de 1887). No se permite una no-decisión. Y una forma de esa denegación se realiza cuando el funcionario no decide el fondo de la controversia por desplazar a las partes su obligación de interpretar los hechos y pretensiones para inferir de ellos el instituto jurídico que rige el caso.

Siempre existirán problemas de interpretación de las normas y "texturas abiertas", pero ello no es un asunto que deba solucionar el usuario de la justicia. La ambigüedad del significado de las normas tiene que ser solucionada con el cerramiento significativo que hace el juez al momento de decidir la controversia". **SC780-2020 Radicación n°18001-31-**

2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL

Por último, con la decisión adoptada por el juzgador de prima instancia no solo se violó el derecho fundamental al debido proceso de mi prohiada, sino que además se desconoció a todas luces los precedentes judiciales establecidos por las altas cortes que versan sobre la materia, en los cuales en casos análogos al presente, la regla determinante del sentido de la decisión (ratio decidendi), verso sobre la aplicación de los **postulados "iura novit curia" y "da mihi factum et dabo tibi ius"** en procesos de responsabilidad donde por imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al invocar un tipo de responsabilidad –extracontractual o contractual- la corte estableció que los mismo deberán con base en lo antes expuesto, ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias, sino a los hechos fundamento de las peticiones, pues de no darse aplicación a este principio se iría en detrimento de las garantías de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción, trasgrediendo los derechos fundamentales de los accionantes.

Aclarándose, que por ser más de tres sentencias cuyo sentido del fallo se funda de la aplicación de los postulados **"iura novit curia" y "da mihi factum et dabo tibi ius"** y en el mismo sentido, esta regla determinante se podría definir como precedente vinculante; para ejemplo me permito citar las siguientes:

- **Sentencia de 2 de diciembre de 1941.**
- **Sentencia N° 208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906.**
- **CSJ SC-071, 16 Jul. 2008, Rad. 1997-00457.**
- **CSJ SC13630-2015, 7 Oct. 2015, Rad. 2009-00042-01.**
- **CSJ STC6507-2017.**
- **STC11525-2019, 28/08/2019**
- **SC780-2020 Radicación n°18001-31-03-001-2010-00053-01**

Con lo antes expuesto me permito señor Juez, dejar precisados y sustentados los reparos que presente en audiencia de fecha 25 de noviembre del 2022 y que sirvieron de fundamento al recurso de apelación interpuesto por esta apoderada contra el fallo emitido por su Señoría en la citada audiencia.

Del señor Juez,

Atentamente,



LUZ ANGELA BARRERO CHAVES

C.C. No. 65'763.433

T. P. No. 261.815 del Consejo Superior de la Judicatura.